



PREFECTURA
DE IMBABURA

2014-2019

**PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS E
INICIATIVAS PRODUCTIVAS LOCALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL
DE IMBABURA**

CONVENIO Nro. 075-GPI-PS-2016

CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN CAMPESINA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FERIA CAMPESINA AGROECOLÓGICA LA PACHA MAMA NOS ALIMENTA Y EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS E INICIATIVAS PRODUCTIVAS LOCALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA PATROCINADO POR LA PREFECTURA DE IMBABURA.

CLAUSULA PRIMERA. -COMPARECIENTES

Intervienen en la celebración del presente **CONVENIO**, por una parte, el GAD Provincial de Imbabura, representado por la ingeniera María Gabriela Jaramillo Puente, Prefecta de la Provincia de Imbabura Subrogante, parte que en lo posterior se denominará GADPI; y, por otra el Señor Luis Alfonso Morales Cushcagua Representante legal de la UNORCAC - Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi, que en lo posterior se denominará **"ORGANIZACIÓN EJECUTORA"**, quien libre y voluntariamente, acuerda suscribir este instrumento, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA SEGUNDA. - ANTECEDENTES

Que el artículo 85 de la Constitución de la República establece que la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garantizan los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán para hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos;

Que el artículo 248 de la Constitución de la República establece que: Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación;

Que el artículo 280 de la Constitución de la República establece que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. Por tanto, es necesario regular la aplicación de los principios de sujeción coordinación establecidos constitucionalmente;

Que el artículo 283 de la Constitución de la República establece que el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir;

1



Recibido por

X. Kentez

Hora: 16:30

Fecha: 10-10-2016

DESARROLLO ECONÓMICO, GESTIÓN
AMBIENTAL Y RR. HÍBRICOS

CONVENIO NRO. 075-GPI-PS-2016

9/



PREFECTURA
DE IMBABURA

2014-2019

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS E INICIATIVAS PRODUCTIVAS LOCALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Que el artículo 284 de la Constitución de la República establece los objetivos de la política económica, entre los que se encuentran: el asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional; y, mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo;

Que el artículo 285 de la Constitución de la República establece como objetivos específicos de la política fiscal el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables;

Que el artículo 286 de la Constitución de la República dispone que las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conduzcan de forma sostenible, responsable y transparente, y procurarán la estabilidad económica;

Que el artículo 292 de la Constitución de la República establece que el Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Lo que conlleva la necesidad de establecer los instrumentos e instancias de coordinación que permitan garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, el manejo eficiente del ahorro público y la preservación del patrimonio nacional y el bien público como fin último de la administración presupuestaria;

Que el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD-, establece: "...La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución, comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes;

Que el artículo 7 del COOTAD, establece: "...el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial". Los artículos 29, 40 y 41, establecen las funciones del Gobierno Provincial de Imbabura (GPI): de legislación y fiscalización, de ejecución, administración y de promoción del desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial;